

29 de Junio de 2020

A sus Señorías, integrantes de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados.

La triple crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19 tiene dimensiones desconocidas y, por ello, necesita herramientas que no forman parte del catálogo de la política española tradicional.

Desde el movimiento social ROJOS ESPAÑA, hemos realizado un análisis crítico de la situación y sintetizamos aquí, constructivamente, nuestras propuestas.

Teniendo en cuenta que estamos ante una pandemia, es decir, una crisis global por definición, el primer ámbito de análisis es el internacional.

1. Política internacional.

La crisis sanitaria del COVID-19 es solo la última prueba, sangrante, de la incapacidad de la comunidad internacional para afrontar la pérdida de soberanía de los Estados y la ausencia de estructuras políticas globales que conformen una nueva soberanía eficaz.



Han quedado al descubierto las carencias del multilateralismo político y de la globalización económica. En cuanto al primero, el mejor ejemplo es el débil y dubitativo papel desempeñado por la OMS. En cuanto a la segunda, el rol desempeñado por China debería hacer saltar todas las alarmas: se la acepta en las organizaciones internacionales a pesar de no respetar unos mínimos derechos laborales y, además, acaba teniendo el monopolio de algo tan estratégico como ciertos productos sanitarios.

También se ha evidenciado la necesidad de insistir en el valor de los consensos y estándares científicos internacionales, y de promover procedimientos que impidan a los países salirse de ellos.

En cuanto al ámbito concreto de la UE, que nos atañe singularmente, se trata de un proyecto que nació como mercado común y como antídoto contra los nacionalismos egoístas que habían provocado dos guerras mundiales en el continente. La voluntad colaborativa de signo político viene sufriendo intensamente durante los últimos tres lustros, como indican claramente el fracaso de la Constitución Europea (2005), la incapacidad para una resolución concertada de la Gran Recesión (2008-2014) o la crisis del Brexit (2016-2020).



Aunque la Gran Recesión dejó claro que someterse al dictado de los países que más dinero aportan no ayudó significativamente a nadie y dejó en la estacada a un alto porcentaje de la población europea del sur, parece que la tendencia sigue siendo la despolitización de la UE, estancada en un mero mercado común dominado por la ideología hegemónica neoliberal.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 —una enfermedad más contagiosa y mortal que otros virus conocidos, y aún sin vacuna— enfrenta a las sociedades a tomar distintos tipos de medidas que basculan entre dos polos radicales: esperar a la inmunidad comunitaria y dejar que se queden en el camino quienes no puedan pelear solos contra el virus, o asumir un confinamiento extremo para que el sistema sanitario pueda asimilar la entrada masiva de enfermos y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. La primera vía ha tenido su paradigma en Suecia y la segunda en China. Entre esas dos posturas radicales ha habido algunas intermedias (Corea del Sur). Los países del sur de Europa han apostado mayoritariamente por el confinamiento y los países del norte, por la inmunidad comunitaria. Esa tendencia inicial provoca que los países del norte no quieran asumir los gastos generados en los países del sur. Por otro lado, el coste del confinamiento (endeudamiento estatal para mantener el tejido productivo y la subsistencia de la población, y el gasto del sistema público de salud) es inasumible para ningún país en solitario sin política monetaria propia. Es el BCE la única herramienta capaz de



ponerse al frente de esta crisis, sin descartar la intervención del FMI, como ya ha hecho en crisis recientes de países europeos.

Ante esta tesitura, los países europeos que más aportan se han posicionado inicialmente, otra vez, del lado de la insolidaridad, no queriendo asumir ninguna parte del coste. Aunque en segunda instancia se han moderado las posiciones, el debate sigue abierto, siendo su centro ahora la condicionalidad de las ayudas. Si la salida definitiva de la crisis somete a los países más dañados por la crisis a una financiación insuficiente o fuertemente condicionada, la supervivencia de la UE sería casi imposible, porque la ciudadanía de esos países —por ejemplo, España— no encontraría sentido a la unión política y fraterna de los pueblos de Europa.

Así, pues, en este ámbito:

- España debe apostar con toda la contundencia política por los Estados Unidos de Europa (EUE), asentados sobre los valores de la Revolución Francesa, consolidando la idea de ciudadanía europea y equilibrando las diferencias de poder entre los Estados. Creemos que si los países más reacios (Alemania, Austria, Finlandia, Holanda) insisten en su apuesta insolidaria España debe liderar la propuesta de una nueva comunidad europea con los países que elijan el humanismo político antes que el economicismo: se trata de dos formas de ver el mundo

tan distintas que difícilmente podríamos compartir proyecto en el futuro.

- Revisión de los acuerdos internacionales en la línea de exigir estándares laborales comunes que impidan el dominio económico de países que carecen de ellos.
- Asegurar la autosuficiencia nacional de productos básicos, fundamentalmente alimentarios y sanitarios, pensando en posibles crisis futuras, sanitarias, políticas o climáticas.
- Romper los monopolios y oligopolios de algunos países en la producción de bienes y servicios de primera necesidad.
- Establecer estándares científicos internacionales de obligado cumplimiento.

La triple crisis también ha puesto el foco sobre multitud de deficiencias en el ámbito nacional, entre ellas:

- a) El modelo productivo de la economía española.
- b) La grave desigualdad y el crecimiento de las clases precarias.
- c) La desestructuración territorial del país.
- d) Las fallas del sistema autonómico.
- e) La inexistencia de los cuidados en el sistema de bienestar.
- f) La brecha digital.
- g) El atraso en la implantación del teletrabajo.
- h) La incapacidad política para alcanzar acuerdos.
- i) La deslegitimación de la clase política.

2. Política nacional.

2.1. Economía.

El ámbito económico es, sin duda, el más relevante de esta crisis. La situación es potencialmente tan grave que la prioridad podría llegar a ser garantizar una economía de subsistencia para un porcentaje amplio de la sociedad española.

2.1.1. Cuestionamiento de los dogmas económicos hegemónicos.

Las dos medidas principales que propondremos a continuación no son, en realidad, sino ideas para diseñar una transición de modelo económico global.

Las medidas de endeudamiento que deberían ser facilitadas por el BCE y las que deberá soportar por sí mismo el Estado español incrementarán notablemente la deuda pública, al tiempo que decrece notoriamente el PIB. Este callejón sin salida exige un trabajo a largo plazo —pero al mismo tiempo urgente— por cambiar los fundamentos dogmáticos de la economía neoliberal hegemónica, en la que el endeudamiento está casi prohibido y el PIB es el dato que marca la riqueza de un país. No hay riqueza posible si un país no puede atender a

sus ancianos en los hospitales cuando lo necesitan, y la deuda es una herramienta económica insoslayable para atender situaciones tan extraordinarias como esta. Esta crisis obliga a los partidos políticos no solo a «gestionar» la triple crisis, sino, sobre todo, a cambiar los fundamentos de la economía hegemónica, apostando por un horizonte innovador donde convivan proporcionalmente la propiedad privada, la propiedad comunal y la iniciativa pública del Estado. El Estado y El Gobierno también deben erigirse en actores políticos pedagógicos en torno a un sistema de valores comunitarios donde impere la responsabilidad cívica más allá del papel de «papá Estado»: la reconstrucción necesaria es también una reconstrucción ética sobre las ruinas morales del neoliberalismo.

2.1.2. Modelo productivo

La primera decisión, muy evidente, es delinear de una vez por todas un proyecto de reindustrialización, contemplando también la nacionalización de servicios esenciales. La excesiva dependencia del sector Servicios nos aboca a que en situaciones como esta la economía quede prácticamente en los huesos; por otro lado, la reindustrialización debe ir orientada al autoabastecimiento de todos los productos imprescindibles en un país (como, sin duda, lo son los de carácter sanitario). Se



trata de la vieja y necesaria aspiración de transformar el modelo productivo de la economía española.

2.1.3. Desigualdad y precarización

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo puede considerarse un parche de urgencia. Es necesario tender, como han defendido algunos de los comparecientes en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, hacia una Renta Básica Universal (RBU). No nos extenderemos más en esta propuesta, puesto que compartimos los criterios expuestos por el economista Daniel Raventós.

2.2. Modelo territorial.

2.2.1. Dualidad poblacional.

En el ámbito social, los datos territoriales de impacto del COVID-19 empujan a ser audaces en la toma de decisiones sobre la densidad y la pirámide poblacional de nuestro país.

El terrible golpe de la enfermedad en una Comunidad como Madrid tiene que ver, entre otras cosas, con la alta densidad de población (830 h./km², que llega a 6.822 h./km². en, por ejemplo, Coslada), frente a densidades como la de Soria (9



h./km²). Las zonas más deshabitadas, a su vez, están sufriendo la crisis sanitaria virulentamente también porque tienen una media de edad muy alta (47,45 años en Soria frente a la media nacional de 43,38) y, al mismo tiempo, unas infraestructuras sanitarias muy frágiles.

Esto pone el foco sobre tres problemas sociales que ya existían: la insostenibilidad de algunas zonas de España debido a su despoblación y envejecimiento, el descenso de la calidad de vida en otras por su excesiva densidad poblacional, y la desigualdad entre zonas que el desarrollo del sistema autonómico no ha logrado reducir.

En lo relativo a esta dualidad, algunas de nuestras propuestas son:

- Deducciones fiscales para la repoblación.
- Políticas de retorno para jóvenes (incluyendo medidas que promuevan la natalidad).
- Distribución equitativa de las industrias en el proceso de reindustrialización pendiente (potenciando los proyectos de transformación y distribución de productos locales),
- Mejora y replanteamiento de una red de comunicación hasta ahora radial.

- Realizar un esfuerzo extraordinario en la dotación de servicios allá donde las carencias son más flagrantes.

2.2.2. Desestructuración y desigualdad territorial.

En cuanto al problema de la desigualdad entre CC.AA., la crisis del COVID-19 ha ayudado a que la veamos más descarnadamente que nunca.

Los datos siempre han estado ahí: el sistema autonómico no ha ayudado a reducir las diferencias entre territorios. Esta crisis sanitaria demuestra que mientras en unas regiones se practicaban pruebas diagnósticas en otras no se hacían, que cada gobierno regional gestionaba compras de material sanitario por su cuenta a pesar del mando único propio del estado de alarma, que la solidaridad interterritorial es lenta y disfuncional y, en fin, que cada CC.AA. cuenta y comunica los datos de contagios y fallecimientos según cree mejor, de modo que esa falta de homogeneidad y transparencia imposibilita, en la práctica, una gestión nacional verdaderamente útil y fiable.

Parece imprescindible reestructurar el modelo de Estado en el siguiente sentido:

- Recentralización de algunos servicios básicos (educación y sanidad, singularmente).

- Fuerte coordinación federal del resto de competencias.
- Profunda reforma integral de las Administraciones Públicas que elimine duplicidades y mejore la eficacia y la eficiencia.

2.3. Modelo social.

El Estado de bienestar se ha quedado pequeño como modelo omnicompreensivo de las necesidades sociales del siglo XXI. La crisis del COVID-19 ha señalado con claridad al menos dos aspectos.

2.3.1. Inexistencia de los cuidados en el diseño del sistema de bienestar.

El gravísimo problema de atención a las personas de edad avanzada —singularmente en las residencias, que probablemente deba tener y tenga consecuencias penales— pone el foco dramáticamente sobre el nulo papel del Estado en las políticas de cuidados: la gestión pública debe dar una importancia mucho mayor a las personas que los necesitan y a las que los prestan.

En lo que se refiere a las residencias:

- Insoslayable desprivatización.
- Diseño de un nuevo sistema mixto de gestión pública y cooperativa.
- Priorización de la atención domiciliaria (mayor bienestar emocional y físico de las personas mayores y menor coste económico)
- Incremento de su medicalización, dotándolas al menos de un especialista en geriatría.

En lo que se refiere al sistema de cuidados en términos generales:

- Impulso de una ley destinada al cuidado de las personas con distintas dependencias.
- Blindaje constitucional de los cuidados como uno de los derechos sociales inalienables, junto a otros como el de la asistencia sanitaria universal y gratuita, la educación universal e igualitaria, el derecho a una vivienda digna o una inversión mínima y actualizada en investigación.

2.3.2. Brecha digital

El fracasado intento de teleeducación y el dubitativo y renqueante teletrabajo han puesto de manifiesto, entre otras



cosas, que en España hay muchos servidores públicos que no poseen formación suficiente en el ámbito digital y que hay muchos hogares sin *hardware* ni *software* suficientes para estar conectados al mundo.

2.4. Modelo político.

Una de las consecuencias más relevantes de esta crisis, sino la que más, será un incremento en el descrédito de la clase política, que ya era el segundo problema más importante para los españoles antes de marzo.

2.4.1. Regeneración política.

Aunque el daño causado por la enfermedad no es responsabilidad directa de la gestión política, lo cierto es que están quedando al descubierto imprudencias, imprevisiones, falta de coordinación entre administraciones y carencias de supervisión que, independientemente de sus responsables directos, afectarán a la ya precaria credibilidad de la política y, en este caso, singularmente, a los partidos al frente del Gobierno de España, varias CC.AA., Diputaciones y muchos Ayuntamientos.



Esta realidad, unida a la situación económica y social de la España posterior al COVID-19, aconseja tomar algunas medidas de urgencia para sostener el crédito de la política:

- Análisis y reconocimiento de errores cometidos.
- Asunción de responsabilidades políticas concretas.
- Eliminación de privilegios superfluos de los representantes públicos.
- Reducción de los salarios con el objetivo de acercarlos al sueldo medio del país.
- Reconsideración de la política como servicio público y no como carrera profesional, limitando a doce como máximo el número de años de permanencia en ella.

2.4.2. Pacto de Estado

Como es fácil deducir de todo lo anterior, abordar esto políticamente con garantías de éxito solo es posible desde unos Pactos de Estado semejantes a los llevados a cabo en España en 1977.

En primer lugar, porque será beneficioso para el país introducir una cultura de previsión a largo plazo por encima de los ciclos electorales, sobre todo en lo que concierne a temas esenciales de interés general. En segundo lugar, porque algunas transformaciones requieren cambios constitucionales



que necesitan mayorías cualificadas. En tercer lugar, porque la imprescindible credibilidad de la política es enemiga de las luchas entre partidos ante una situación en la que, con mucha evidencia, está en juego el interés general. En cuarto lugar, porque será la única manera de evitar que el sistema democrático se cuestione ante la tentación de los populismos autoritarios. En quinto lugar, porque en un momento en que el Estado tendrá que asumir casi todo el peso de la reconstrucción del país, unos acuerdos políticos tienen la oportunidad de reequilibrar el sistema social, en este momento al albur de los exclusivos intereses de mercado. Y en sexto y último lugar, porque los costes políticos de una crisis difícilmente evitable han de ser pagados equitativamente.

Esperamos que este análisis político y las propuestas concretas que trasladamos con ánimo radicalmente constructivo, puedan servir de inspiración en las políticas públicas que serán necesarias para superar el peor momento de España desde hace casi un siglo.

Enrique Pérez Romero
Francisco Javier Marín Vázquez
Presidentes de ROJOS ESPAÑA

Telegram: <https://t.me/SomosRojos>

Facebook: <https://www.facebook.com/EspanaRojos/>

Twitter: <https://twitter.com/EspanaRojos>

Pinterest: <https://www.pinterest.es/rojosesp/>